

Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir

Broederlijk Delen 



Quito, abril 2008

**Territorios y recursos naturales:
el saqueo versus el buen vivir**

Producción: *Broederlijk Delen*

Edición: *Agencia Latinoamericana de Información - ALAI*

Revisión de textos: *Sally Burch, Eduardo Tamayo G., Juan Pablo Corral*

Corrección: *Paola de la Vega*

Ilustración de portada: *Jano*

Diseño de portada: *Verónica León*

Diseño y diagramación: *Serafín Ilvay*

Impresión: *Gráficas Silva*

ISBN: 978-9942-01-660-7

Quito, abril 2008

Broederlijk Delen

Huidevettersstraat 165

1000 Brussels, Bélgica

T. (32) (0)2/502.57.00 F. (32) (0)2/502.81.01

info@broederlijkdelen.be

<http://www.broederlijkdelen.be/>

Agencia Latinoamericana de Información - ALAI

Casilla 17-12-877

Quito, Ecuador

T. (593 2) 250 2074 F. 250 5073

info@alainet.org

<http://alainet.org>

Los artículos y las opiniones vertidas en este libro son de estricta responsabilidad de sus autores/as y no reflejan necesariamente el pensamiento de las entidades editoras. Pueden ser reproducidos, a condición de que se mencione debidamente la fuente.

Indice

<i>Introducción. Las venas (re)abiertas de América Latina</i>	5
<i>Prefacio, Joan Martínez Alier</i>	11
I. Visiones e intereses en disputa	
Los recursos naturales como mercancía, <i>Marco Arana Zegarra</i>	19
De deudores a acreedores, <i>Aurora Donoso Game</i>	32
La madre naturaleza desde la cosmovisión Maya, <i>Rodolfo Pocop Coroxon</i>	39
II. Tendencias político-económicas en el control y manejo de los recursos naturales	
Los alcances de la deuda ecológica, <i>Hildebrando Vélez</i>	49
Plan Colombia, plan de muerte, <i>Diana Murcia</i>	57
Guatemala: Libre comercio y TLC versus integración de los pueblos, <i>Natalia Atz Sunuc</i>	66
Ecuador. Desplazamiento y muerte: la otra cara de la represa Baba, <i>Germán Jácome López</i>	72
III. Estrategias de defensa de los recursos naturales	
La justicia ambiental en la estrategia del ecologismo popular, <i>Lucio Cuenca</i>	79
Las luchas del ecologismo popular en Ecuador, <i>Alexandra Almeida</i>	85
Colombia: Las nuevas soberanías, <i>Hildebrando Vélez</i>	92
La minería en Honduras: un atentado contra la salud pública, <i>Juan Almdares</i>	98

Dos casos de resistencia a la contaminación tóxica en el Ecuador, <i>Esperanza Martínez</i>	106
Ecuador: La lucha de Sarayaku contra las petroleras, <i>Betsy Santi Gualinga</i>	112
Desde lo local a lo mundial en defensa de los bosques, <i>Ricardo Carrere</i>	115
Bolivia: Defensa del territorio frente a la Repsol, <i>Rubén Cuba</i>	122
Bolivia: Control comunitario de los recursos naturales, <i>Fernando Garcés</i>	130
Redes del Norte: Aliadas estratégicas, <i>Geneviève Tournon</i>	134
El caso del Congo: “celular sin sangre”, <i>Thomas Craenen</i>	137
Transparencia y rendición de cuentas, <i>Laura Furones Fragoso</i>	141
Responsabilidad social empresarial: Maquillando el saqueo, <i>César Padilla</i>	146

IV. Alternativas para un manejo sostenible

La soberanía en tiempos de globalización <i>Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres</i>	155
Uso alternativo de las fuentes energéticas en Cuba <i>Ángel Luis Brito Sauvanell</i>	166
Colombia: Los recursos naturales desde la espiritualidad e interculturalidad <i>Aparicio Ríos</i>	170
Bolivia. Defensa colectiva de los derechos socio-ambientales, <i>Elizabeth López</i>	181
Un camino alternativo: El Tratado Comercial de los Pueblos, <i>Miguel Lora</i>	184
Hacia una sociedad post-petrolera, <i>Elizabeth Bravo</i>	196
Petróleo, rentismo y subdesarrollo: ¿una maldición sin solución? <i>Jürgen Schuldt, Alberto Acosta</i>	204

I. Visiones e intereses en disputa

Los recursos naturales como mercancía

*Marco Arana Zegarra
GRUFIDES - Perú*

Hasta hace poco tiempo, no importaba nada aquella frase de Gandhi que dice: “En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades humanas pero no lo suficiente para satisfacer la codicia y la avaricia humana”.

¿Qué implicaciones tiene para nuestros países, y concretamente para muchas de nuestras comunidades, el que se haya convertido a los recursos naturales –de acuerdo al enfoque de la economía capitalista– en una mercancía, despojándolos de todo su valor cultural, simbólico, religioso y también como fundamento de la sostenibilidad de la vida?

A partir de la experiencia peruana y de la aproximación a las diversas lecturas teóricas que se han hecho en la región, queremos mostrar cómo esta etapa de expansión del capitalismo y su lógica de acumulación de capital ha implicado, para los países del Sur, la depredación de sus recursos naturales. Y es que éstos, en la actualidad, son concebidos básicamente como mercancías, y convertidos, de esta manera, en el meca-

nismo más adecuado para incrementar el plus valor y la renta del capital.

Como veremos a continuación, los recursos naturales y la sostenibilidad de los ecosistemas en nuestra región no han sido temas prioritarios, más bien nuestra mirada se ha centrado en la presencia del capitalismo y en cómo éste, en términos económicos, ha transferido y saqueado nuestros recursos naturales. A pesar de ello, en las últimas décadas, se ha adquirido mayor conciencia sobre la amenaza existente contra los ecosistemas y las culturas vinculadas a éstos. En este sentido y bajo esta lógica, se despoja a los recursos naturales de su significado de “vida” para nuestras comunidades.

La modernidad y su racionalidad técnica, científica y económica se han constituido en

los ideales que hay que alcanzar en nuestros países; además, su aplicación o no aplicación se han convertido en una suerte de línea divisoria entre “buenos y malos”. De esta manera, quienes se oponen a esta lógica son calificados por el discurso hegemónico como “los enemigos del desarrollo”, a quienes se les responsabiliza de ser causantes de los conflictos socioambientales. No es casual que muchos de los movimientos y líderes que reivindican la pluriculturalidad y el derecho a un desarrollo con dignidad humana, sean vistos como “los enemigos del desarrollo y de la inversión privada” y como los “conspiradores” principales para que no podamos salir de la pobreza. Tampoco es casualidad que el mismo Banco Mundial señale a la pobreza, bajo esta racionalidad, como el principal enemigo de la sostenibilidad ambiental. En términos del discurso político, esto se traduce en señalar a los pobres como los principales enemigos del desarrollo, y no a la injusticia social como tal.

Lo que oculta la racionalidad economicista es la necesidad de encontrar nuevas formas de dominar la naturaleza y de someter los recursos naturales. Los discursos más finos y sutiles, como aquel que afirma que el uso de tecnologías “dulces” o “de punta” hará posible un manejo sostenible y “limpio” del ambiente, olvidan, por ejemplo, que los campesinos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas han venido denunciando que la aplicación de estas tec-

nologías modernas les está privando de su derecho al agua limpia y a las fuentes naturales de donde ésta proviene.

Hace sólo unas décadas se pensaba todavía que la abundancia de los recursos naturales no iba a poner en peligro la sostenibilidad de los ecosistemas, ni tampoco iba a amenazar la propia expansión de la economía capitalista, de ahí que el tema ambiental no haya tenido especial importancia. Esto comienza a cambiar cuando se producen devastaciones, desertificaciones, salinización de suelos o erosión de los mismos, y procesos de contaminación atmosférica que, como hoy sabemos, pueden poner en peligro la preservación de la vida en todo el planeta.

El ideal de Ghandi de regresar a una economía más natural y orientada a obtener sólo lo necesario para vivir, aparecía hace poco como un ideal utópico e impracticable. Sin embargo, el agotamiento de los recursos naturales está demostrando, incluso en las propias entrañas de la economía capitalista, la importancia de preservarlos. No es casualidad que surjan organismos multilaterales de cooperación internacional en este campo, que se organicen cumbres internacionales como la de Río de Janeiro y Johannesburgo, o aparezcan iniciativas como las de Kyoto que ponen, a nivel del diagnóstico, el dedo en la llaga y que comienzan a decir, al menos, que hay que intentar mitigar es-

tos impactos o encontrar formas de frenar la destrucción global que se está causando. Por cierto, las medidas que se proponen se limitan a seguir las reglas del juego de un modelo económico que no se cuestiona radicalmente.

Recordemos la iniciativa de la Comisión Brundtland, que expresa la encrucijada en la que se encuentran los intereses del capital en esta época. La necesidad de pensar la supervivencia del sistema de acumulación capitalista, sin profundizar demasiado en las relaciones Norte-Sur, les ha obligado a desplazar su centro de preocupaciones, de la lógica del incremento de la producción y del consumo, a la lógica del incremento de políticas que permitan proteger la sostenibilidad del ecosistema, pero, claro está, sólo como condición de su propia supervivencia. Por ello, y no por otra razón, es que se comienza a hablar de la importancia de estas tecnologías “limpias” o tecnologías “dulces” –a las que ya nos hemos referido antes– como alternativas para que la lógica expansiva del capital continúe sin poner en riesgo su propia supervivencia en el tiempo.

Para entender el alcance de estas nuevas tecnologías, utilizo una comparación que a veces suena demasiado dura, y que me ha ocasionado problemas en diversos escenarios: las tecnologías “limpias” son el equivalente, en ética política, a las guerras “limpias”. Esta distinción hace perder de

vista toda la racionalidad de la guerra, que es el poder que se impone por la violencia de las armas, y que puede asesinar y matar la vida. Por lo que, en realidad, hablar de guerras “limpias” o de guerras “sucias” es utilizar un eufemismo para disfrazar la maquinaria de violencia que supone toda guerra, y los intereses económicos que hay detrás de ellas.

Algo similar ocurre en el tema de las tecnologías “limpias” y las tecnologías “sucias”. Habría que preguntarse: ¿limpias respecto de qué? Tal vez, ¿de lo que ensuciaban antes? O quizás deberíamos decir: ¿limpias respecto de lo que necesitan nuestras comunidades para vivir en armonía con el entorno y entre sí? Desafortunadamente, para las comunidades las tecnologías “limpias” o las tecnologías “dulces” son simplemente mecanismos para, en el mejor de los casos, mitigar los impactos ambientales o los procesos de contaminación o destrucción de los ecosistemas que produce esta racionalidad económica; o con frecuencia, son un mecanismo para ocultar o negar los impactos reales y externalizar costos sobre las economías locales, incrementando, por tanto, los niveles de pobreza.

Hay que admitir que para difundir la bondad de las tecnologías “limpias” las empresas cuentan con voceros científicos que a través de los medios de comunicación global han colocado el tema sin dar mayor cré-

dito a los miembros de la comunidad científica independiente que cuestionan dichas tecnologías. De esto podemos concluir que es preciso plantearnos las cuestiones de la hegemonía del pensamiento y cómo desafiarlo, aún sabiendo que los derechos de las comunidades no se reducen a lo que se decida en las esferas técnicas y científicas, tal como la racionalidad extractiva pretende que sea, pues es en este campo donde se pretende excluir de la toma de decisiones a las comunidades al descalificarlas por “no ser científicas”.

En este punto, también es necesario abrir un paréntesis para reflexionar sobre la relación entre economía, política y ética. Con frecuencia, suponemos que el modelo de acumulación capitalista, tal como se lo ha descrito, carece de ética. Sin embargo, para los organismos multilaterales de cooperación, como el Banco Mundial o la Corporación Financiera Internacional, este modelo está diseñado para disminuir la pobreza. Y, por supuesto, desde esta lógica, no entienden cómo existen opositores a una estrategia de extracción de recursos naturales, sobre todo ahora que tal actividad supone mucha rentabilidad, y considerando, además, que luego de unos años el cobre, probablemente, ya no será importante, o que el oro no tendrá la misma demanda ni los mismos precios que ahora tiene en el mercado internacional. “Si no pescan esta oportunidad, no habrá otra” –nos advierten. Si observamos con cuidado este discurso, entenderemos que no es que este modelo carezca de ética, sino que más bien su ética tiene una orientación específica, de carácter utilitarista e instrumental.

Así, lo paradójico del modelo de acumulación capitalista, es que en un momento de su etapa de desarrollo industrial sus valores coinciden con los valores liberales en

<p>El rol que deben cumplir la ciencia y el conocimiento debe seguir la misma lógica que Gramsci le asignaba al rol de los científicos y de los teóricos respecto del movimiento social, es decir, convertir el acceso al conocimiento y la técnica en una suerte, si se quiere, de conocimiento orgánico. O sea, el conocimiento y la técnica al servicio de las causas justas de nuestros pueblos.</p>	<p>El rol de la ciencia y la lógica de producción del conocimiento son funcionales a la dinámica económica, y por tanto, por más que una comunidad tenga acceso ilimitado a la información, y por muy capacitados que estén sus miembros, no se va a definir la defensa de sus derechos ambientales y sociales en el debate técnico.</p>
--	--

defensa de los Derechos Humanos, y que ahora, en su fase más desarrollada, aquellos que luchan por los Derechos Humanos son considerados sus principales enemigos. Actualmente, defender dichos Derechos aparece como una acción contraria a esta fase del desarrollo y, por tanto, es calificada como subversiva. Afortunadamente, en el otro extremo, desde una perspectiva mucho más profunda, se reivindica un modelo con una ética de orientación humanista, integradora y también mucho más solidaria, no sólo con los seres humanos sino también con la naturaleza, y no únicamente desde una perspectiva temporal presente sino también futura. En resumen, el problema no es saber si el modo de organizar la economía es ético o no, sino entender qué tipo de ética es la que sustenta el modelo.

Por todo esto, el uso de las llamadas tecnologías “limpias” no ha significado de ningún modo un cambio en el drama de destrucción de los ecosistemas y las culturas de las comunidades locales de nuestros países. Por el contrario, el proceso de expropiación y explotación de los recursos naturales se ha incrementado. Un ejemplo de esto constituyen las leyes peruanas sobre minería, que datan de inicios de los 90, y en las cuales se han incorporado mecanismos de expropiación de tierras a las comunidades indígenas y a las comunidades campesinas a favor de los proyectos mineros, pasando por encima de la vigente Ley de Comuni-

dades Nativas en el Perú, la cual establece que sin el consenso de al menos el 75% de los miembros de una comunidad, no se puede privatizar o vender tierras comunitarias; asimismo pasan por encima de la suscripción de compromisos internacionales que protegen los derechos de las comunidades nativas, como, por ejemplo, el famoso Artículo 169 de la OIT.

Y por si el camino que les ha abierto esta ley a las empresas no funcionara expeditivamente, hay otros caminos como los que ilustran el caso de Majaz, en Cajamarca, y en otras comunidades, en el centro y sur del país, en donde las empresas mineras llegan a acuerdos sólo con los dirigentes de las comunidades para producir, comprar y repartir las tierras, al margen de las decisiones de los demás miembros. Lo más grave es que una vez iniciados estos procesos, difícilmente pueden ser revertidos y sus impactos sociales se dejan sentir rápidamente al interior de las propias comunidades: ruptura de la solidaridad social y cambio dramático de sus formas de vida con pérdida de territorios que anulan para siempre la sostenibilidad de toda forma de reproducción de su vida material y espiritual.

La expropiación del territorio como nueva estrategia de expansión del capital

A la estrategia de convertir los recursos naturales en mercancías, habría que sumarle –como parte de ella– las nuevas estrategias de apropiación del suelo y de los recursos. Este saqueo se articula por medio de nuevas leyes nacionales o internacionales, que fueron implementadas por los tratados o convenios internacionales, como, por ejemplo, el de la OIT, el cual facilitó el traspaso de las tierras de las comunidades –muchas de ellas consideradas intangibles– a manos de las empresas transnacionales. Este proceso está ocasionando que en los países del Sur se produzca una enorme carga ambiental, acentuada en gran medida porque estas empresas hacen aquí lo que en sus países les está prohibido hacer. Por ejemplo, aquí no existe ningún impedimento o restricción para realizar experimentos, como el que se hizo en Oruro-Bolivia, cuando los tajos abiertos fueron convertidos en lagunas artificiales; o como lo que se pretende hacer en Cajamarca, ahora mismo, al convertir uno de estos tajos abiertos en represa de agua para abastecimiento humano. La destrucción que la minería de tajo abierto causa en las lagunas, es sustituida –con aprobación de estudio de impacto ambiental de por medio– por lagunas muertas cuyas bases están plastificadas, como ocurre actualmente

con el tajo abierto de San José, convertido en reservorio.

Las recetas de los años setenta, basadas en las teorías desarrollistas, que se vendieron en América Latina como la única salida al “subdesarrollo”, fueron un fracaso. Los datos demuestran que el haber seguido este camino no significó para nuestros países avanzar hacia el progreso, sino que por el contrario ha significado alentar el desarrollo del “subdesarrollo” en la región. Las cifras de la pobreza y de la inequidad en la distribución de la riqueza en América Latina han crecido cada vez más, y se ha confirmado con ello, lo que decían los obispos latinoamericanos, hace ya más de treinta años, cuando al referirse a este proceso, lo definían como una suerte de dinámica económica y social que estaba provocando la presencia de “ricos, cada vez más ricos, a costa de pobres, cada vez más pobres”.

Esta situación es consecuencia, en parte, de la pérdida de los recursos naturales y de la fuga de rentas de Sur a Norte, pero también tiene que ver, como dice Enrique Leff, con la pérdida del potencial productivo en nuestras naciones, provocada por la transnacionalización de nuestra economía central y, básicamente, por el rol que se nos ha asignado en el concierto internacional: nuevamente, como proveedores de materias primas. No es casualidad que el denominado boom minero de los noventa en Amé-

rica Latina coincide con las necesidades de desarrollo que se experimentan en el Norte o en Asia, en China o en India.

La rapidez e intensidad con la que se explotan los recursos naturales, en la actualidad, está provocando grandes fracturas a nivel cultural y social al interior de las comunidades, pero también en los ecosistemas, que han perdido su capacidad de regeneración que debería ir restituyéndose con la misma velocidad e intensidad con la que avanza el ciclo depredador. Este es el caso de las comunidades nativas de la selva que han sufrido las consecuencias de la deforestación, provocada por las industrias petroleras o madereras. Otro ejemplo es lo que está ocurriendo en los Andes de Perú, con la destrucción de los acuíferos en las cabeceras de las cuencas, que trae como consecuencia la escasez y la contaminación del agua en las comunidades altoandinas y de aquellas de las partes bajas de las cuencas.

Como vemos, nos encontramos en un momento crucial para América Latina, pues estamos asumiendo costos ecológicos que la economía ambiental denomina “externalidades de las industrias extractivas”, las cuales están provocando un nivel mayor de destrucción, y también de pérdida de oportunidades para utilizar mejor nuestros ecosistemas y nuestros recursos naturales en función de un desarrollo propio. Muestra

dramática de esto son las comunidades mineras de los países andinos tradicionalmente mineros como Perú y Bolivia, en los cuales el binomio “pobreza y contaminación” suelen establecer una alianza profunda, de la que difícilmente podrán recuperarse esas economías y esas sociedades.

Formas de mercantilizar la naturaleza

Son tres los mecanismos con los cuales la racionalidad capitalista ha estado convirtiendo los recursos naturales en mercancías:

1. Los ritmos de extracción de recursos naturales

A nivel global, lo que podemos detectar es que el ritmo de la destrucción de los recursos naturales está determinado por fuera de la lógica de nuestros países o de la capacidad de decisión de las comunidades locales. Por eso, tal vez la lucha ambiental más importante en la actualidad es aquella por el derecho a la autoafirmación y a la autodeterminación de los pueblos, es decir, el derecho a decidir por qué vías de desarrollo se quieren optar.

Pero mientras el derecho a la autodeterminación de las comunidades o el derecho a la consulta previa, libre e informada, no sea incorporado en las legislaciones nacionales, seguirán ocurriendo casos como los del Ce-

ro Quilish, en los Andes de Cajamarca, en Tambogrande, y las comunidades de Huanabamba y Ayabaca, en Piura. En el caso del Cerro Quilish, se puede verificar claramente cómo mucho antes de que se inicie la explotación minera y se presente cualquier plan de estudio ambiental al Ministerio de Energía y Minas, el proyecto minero de la empresa Newmont ya aparecía en Internet, con lujo de detalles para los inversionistas de la bolsa de New York: cuánto oro se iría a extraer, a qué profundidad sería el tajo abierto, cuánto dinero se tendría que invertir, cuánta demanda de mano de obra se necesitaría, y hasta cuántas ganancias se obtendrían del proyecto. Mientras tanto, a las comunidades locales, la empresa minera no les proporcionaba igual información

Habiendo liderado el equipo de gestión del conflicto del Cerro Quilish, recuerdo cómo en los meses previos sosteníamos conversaciones con el Ministro de Energía y Minas, en las que le decíamos: “Señor Ministro, paralice el proyecto”. A lo que él respondía: “No puedo paralizar el proyecto. Si quieren renunciar, pero no puedo paralizar el proyecto. El Estado peruano será demandado por millones de dólares. Es imposible paralizarlo”. Fue entonces cuando no tuvimos otra alternativa que hacer incidencia política en los altos directivos de la empresa minera en Denver, para que ésta pidiera al Estado peruano la paralización del proyecto a causa de la gran movilización social en la

zona. Finalmente, fue a pedido de la propia empresa que el proyecto minero en el Cerro Quilish quedó paralizado (“hasta cuando la población lo aceptara”). El Estado peruano estaba atado de manos para actuar frente al inmenso poder de la transnacional minera. Este caso ilustra claramente la ausencia de soberanía de nuestros países.

2. Las formas de utilización de nuestros recursos

Aunque en las discusiones y en los foros de los tecnócratas de nuestros países se discuta sobre la necesidad de incorporar mayor valor agregado a los recursos y a las materias primas que se extraen, la realidad señala lo contrario, pues se sigue fomentando la extracción brutal para continuar con los términos inequitativos de intercambio en el mercado, siendo nuestros países, por un lado, proveedores de materia prima y de mano de obra barata y, por otro, compradores de insumos ya convertidos en productos terminados, mucho más costosos. Por lo demás, los niveles de asignación de valor agregado los que nuestros países pueden aspirar en minería son mínimos (probablemente joyería y algunos productos para la propia producción minera), más no producción a escala de alta tecnología (automotrices u otros), ya que esos son nichos industriales reservados para las grandes economías o para quienes éstas hayan asignado ese rol. La renta generada por la actividad

minera en los países pobres no forma parte de innovaciones tecnológicas ni de la diversificación de sus economías.

3. Los procesos de transformación del medio natural

No sólo es preocupante la forma en la que se extraen los recursos para sacarlos de nuestros países, sino también la forma en cómo se dispone y diseña el medio ambiente y se organiza el territorio de las comunidades campesinas, indígenas o nativas para favorecer siempre a los intereses de las industrias extractivas, frecuentemente transnacionales. También, los procesos de transformación de los ecosistemas locales, del medio natural y de los entornos en nuestras regiones, vienen dictados desde afuera, aún en su versión más sofisticada de “venta de servicios ambientales”, propuesta por el Banco Mundial.

Un caso que ilustra esta realidad en Perú, es aquel del proyecto minero chino-canadiense Río Blanco-Majaz, en Piura, al norte del Perú, donde las comunidades defienden sus valles húmedos y páramos como generadores de agua en un ecosistema frágil, y como fuente de su economía de agroexportación de café orgánico y panela, así como

de la producción de alimentos para su propio consumo. En este caso, como respuesta a las protestas campesinas que reclamaban que ningún tipo de actividad minera se instalara en la zona, la empresa resolvió unilateralmente dejar un área intangible de bosques, argumentando que su proyecto minero sería “la primera mina del Perú que tenga un parque natural”. Por cierto, la decisión de organización del espacio y del ecosistema de las comunidades ocurrirá no en función de las demandas y los intereses de las comunidades locales, sino en función de las necesidades que tienen las empresas de generar productos y obtener rentas.

Tipificación de la racionalidad capitalista

Con el propósito de explicar mejor la racionalidad capitalista de conversión de los recursos naturales en mercancía, a continuación se muestra una matriz diseñada por Intermón y Oxfam en un debate sobre el tema de la pobreza y la contaminación, que se realizó en España, hace algunos años, con la participación de algunas organizaciones de América Latina.

Características claves	Acumulación de riqueza, ingreso y poder. Globalización del mercado, competencia.
Actores principales	Corporaciones transnacionales. Instituciones financieras multilaterales. Medios de comunicación monopólicos.
Ideología subyacente	Antropocentrismo radical. La pobreza y el deterioro medioambiental.
Concepto de desarrollo	Crecimiento económico. Producción y consumo antepuestos a conservación y protección.
Actitud frente al deterioro medioambiental	Correcciones tecnocráticas y legales. Control de natalidad y preservación de recursos en países pobres.
Problema central	Ineficiencias en sistema productivo y explosión demográfica.
Ciencia y tecnología	Al servicio de la producción rentable. Utilización de tecnologías de alto riesgo, contaminantes y no renovables.

Entre las características clave de la racionalidad capitalista extractiva está la acumulación de la riqueza, del ingreso y del poder. La importancia de esta matriz está en que muestra un tema importante que no debemos perder de vista: detrás del cómo se obtienen los recursos naturales y se comercializan, como es el caso de los minerales, forestales, pesqueros, etc., no están solamente presentes los intereses de una mayor rentabilidad –objetivo evidentemente

visible de las empresas– sino también, y sobre todo, el interés de acumular poder a nivel global, por lo que terminan las representaciones políticas de los gobiernos de los países ricos con los intereses de las corporaciones transnacionales. En este contexto, las pocas capacidades institucionales de nuestros Estados en el Sur terminan siendo sometidas a la presión de los gobiernos del Norte y sus corporaciones.

De ahí que los principales actores que promueven esta racionalidad, son básicamente las corporaciones transnacionales, las instituciones financieras multilaterales, sus gobiernos y, también, los medios de comunicación globales o monopólicos.

Es importante no perder de vista a estos actores, pues muchas de nuestras comunidades locales piensan, cuando se aborda el tema de la defensa de los recursos naturales, que se trata simplemente de luchar contra una empresa minera, maderera o pesquera, sin considerar los vínculos que éstas mantienen con el poder político mundial, y también con el poder político nacional y local. Desconocer estos vínculos, además de causarnos la pérdida de perspectiva a la hora de entender la problemá-

tica, facilita el fraccionamiento de la lucha en el continente o crea falsas expectativas dentro de las comunidades que piensan que con una huelga o con una movilización se va a vencer fácilmente a los intereses de las grandes empresas. En definitiva, la misma matriz de penetración, control de los recursos y debilitamiento del tejido institucional y comunitario local, se utiliza en Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú. De ahí la importancia, por ejemplo, de intercambios y de construir redes regionales y globales que nos permitan tener una mirada mucho más global sobre la posibilidad de una acción más concreta y coordinada de defensa por parte de las comunidades afectadas en todo el Sur.

A nivel de la ideología subyacente, estamos ante un “modelo naturalista” que, en cierto modo, ha colocado al hombre en el primer peldaño de la escala animal, manera de representar la realidad que viene del positivismo y que sigue siendo predominante.

Otro tema de discusión importante es el concepto de desarrollo que, en la actualidad, está siendo identificado con crecimiento económico. La región de Cajamarca, en los Andes del norte de Perú, en este momento, posee la mina de oro más rica de América Latina y es la región con mayor crecimiento en todo Perú. La región crece a un ritmo de 7% del PBI anual, más que Lima y el promedio nacional; sin embargo, el 75%

de sus habitantes se halla bajo la línea de pobreza. Cuando se identifica desarrollo con crecimiento económico, los resultados son claros: la producción y la obtención de la renta de las grandes corporaciones se sobreponen y se privilegian sobre la conservación y los derechos sociales, económicos y ecológicos de las comunidades locales.

En cuanto al tema de los impactos ecológicos, recordemos lo que dijo Miguel Palacín, de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por las Minería (CONACAMI): “Todo está bien, todo está por encima de los límites máximos permisibles”. Nadie sigue unos estándares mínimos de conservación. En el caso de Perú, éstos se establecieron en los años cuarenta y no fueron fijados para todas las sustancias químicas que causan daño. Es decir, datan de una época en la que no se tenía conocimientos profundos sobre las graves consecuencias, por ejemplo, de la presencia de metales pesados en el agua.

Los problemas centrales que se presentan en este modelo son ineficiencias en el sistema productivo, y uno de los temas que resulta difícil controlar: la explosión demográfica en los sectores más pobres. Es conocido el caso de los esfuerzos realizados en Perú, y en otros países como Venezuela, por ejemplo, para implementar agresivas políticas de control de natalidad, que apuntaban de manera discriminatoria a frenar

la natalidad en los más pobres, como si el problema demográfico y el problema de la pobreza fuera a reducirse con limitar el nacimiento de más individuos, sin cuestionar así los injustos niveles de redistribución de la renta y la destrucción de los ecosistemas –donde los pobres viven– que los obliga a migrar a las ciudades.

Observemos un mapa para ilustrar este problema. Lo que ustedes pueden ver en él es lo que se denomina “el atlas del brillo artificial de los cielos”. Las zonas de mayor

luminosidad son aquellas con mayor consumo energético. Recordemos que, ecológicamente hablando, la proporción del daño ambiental se produce en razón del consumo energético: a mayor consumo energético, mayor degradación ambiental.

Con ello, podemos ver, además, la dinámica de la economía mundial. Los países más desarrollados son los que más brillan, mientras los países llamados pobres o menos desarrollados son los que permanecen en la penumbra.



(Fuente: <http://www.astrogranada.org> Imagen realizada por Craig Mayhew y Robert Simmon, NASA GSFC, basada en datos del DMSP)

El consumo de petróleo per capita anual en EE.UU. es de 25 galones; en el caso de Europa, 12 galones; y en el caso de América Latina y de Asia, apenas 2 galones. Estas cifras revelan por qué EE.UU. necesita provocar una guerra por el control de recursos fósiles y de energía fósil y por qué, a su vez, es el mayor productor de gases contaminantes en la atmósfera.

Afirmar que el desarrollo del Norte es el desarrollo que desea todo el mundo es un absurdo. Sin embargo, el Banco Mundial se atreve a decirlo en un informe en el que se afirma que la única manera de que los países subdesarrollados salgan de la pobreza es la expansión de la industria petrolera y minera. Este modo de mirar las cosas nos lleva a concluir que el discurso ideológico desarrollista no ha desaparecido sino que vuelve otra vez, de una manera mucho más agresiva y más sutil: esta vez anunciando que los pobres saldrán de su pobreza si sus ecosistemas y sus riquezas son expropiadas por las grandes corporaciones.

Por esta razón, ahora más que nunca, es importante debatir sobre si es posible o no poner en la agenda pública las experiencias locales de economías más distributivas y solidarias como las que tienen nuestros pueblos o nuestras comunidades, frente a otras formas de economía que no lo son. Esto implica aceptar que nuestras comunidades han sido afectadas por el modelo capitalis-

ta, en términos de penetración ideológica e implementación de prácticas sociales, y que no han mantenido intactas sus capacidades redistributivas y sus formas de organización solidaria, sino que, de diversas maneras, se han articulado a la economía de mercado. Tampoco digo que por esto no tengan un acumulado, un acervo y una identidad cultural que puede enriquecer nuevas formas de organización social. En este sentido, me parece peligroso, por ser ajeno a la realidad, el que haya plataformas sociales que planteen una estrategia de atrincheramiento en la identidad nativa e indígena. Creo que es preciso ir a formas mucho más dinámicas, y, probablemente, mucho más heterodoxas o sincréticas, si se quiere, para decirlo en términos culturales. Es decir, para afrontar la economía global o el tema del indígena nativo, tiene que haber una propuesta que no plantee algo encerrado en sí mismo, sino más bien algo capaz de aportar una vena y un nutriente de riqueza, de valores que integren otros valores y que ofrezcan como universales también sus propios valores.

Marco Arana Zegarra es sacerdote diocesano de Cajamarca. Máster en Sociología. Premio Nacional de Derechos Humanos en Perú. Fue fundador y Director Ejecutivo de la ONG, Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible - GRUFIDES. Actualmente es directivo de la Red Muqui, Propuesta y Acción de Perú, así como miembro de la Red Latinoamericana de Conflictos Mineros.